



no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!

Año 26 - Nº 182 (3ra. época)

Precio \$60 - Solidario \$100

20-03-2023

No se banca más



El escenario económico y el plan del gobierno

Pág. 2

Rosario: Fuerzas federales y armadas

Pág. 5

Chaco: Pueblada en el Impenetrable

Pág. 8

El Salvador: El detrás de cámara del gobierno de Bukele

Pág. 12

Libertad a los detenidos en Mendoza

El escenario económico y el plan del gobierno

Complicado y aturdido

La previsión original de leve crecimiento en torno al 2%, sequía mediante, dio paso a un escenario de recesión entre -2 o -3% y de caída de reservas para 2023. El FMI flexibiliza una meta (reservas) pero endurece otras, mientras la inflación perfora récords. La quiebra de varios bancos anuncia un posible caos financiero mundial. El gobierno despeja vencimientos de deuda en pesos, pero a un elevado costo. Diferencias en el FdT respecto al acuerdo con el Fondo. ¿Qué nos espera a los sectores populares con este combo?

Desde septiembre de 2022 Argentina vive una sequía, acompañada de altas temperaturas y numerosas olas de calor durante el verano y una helada inesperada, todo lo cual produjo la destrucción de cultivos de exportación (soja, trigo, maíz y sus derivados agroindustriales) por unas 50 millones de toneladas, un valor aproximado de U\$S 14.000 millones (15 a 20% de las exportaciones anuales) y un impacto en la actividad económica del -3% del PBI, además del golpe a las arcas públicas por la disminución de las retenciones y otros impuestos (-U\$S 6.000 millones), según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. El menor ingreso de divisas al circuito económico local será un empujón a la devaluación del peso, la escasa oferta de granos seguramente provocará un aumento de su precio local (sumando puntos a la inflación), la baja en la recaudación fiscal pondrá dificultades al cumplimiento de la meta impuesta por el FMI (déficit del 1,9% del PBI en 2023), la disminución de las reservas del BCRA impactará en la financiación de las importaciones (afectando la actividad industrial); todo ello hará que la "recuperación" económica del 2022 se revierta para 2023 con una caída de la actividad económica y -consecuentemente- de los niveles de empleo. Tal es así que el gobierno modificó sus estimaciones: de un crecimiento del +2% del PBI pasamos a una recesión del -2 o -3% para 2023, según cálculos no oficiales (Página12, 11/3).

El retroceso económico tiene un impacto mayor si consideramos que aquella "recuperación" de 2021 y 2022 no estuvo acompañada de una redistribución de la riqueza en favor del sector trabajador (para compensar la pérdida salarial del macrismo y la pandemia), sino de su concentración en manos del gran capital: así lo atestiguan la caída del salario real de 2022 y los porcentajes de participación de salarios y ganancias en el producto económico. En otras palabras, los padecimientos de los sectores populares (pobreza, bajos salarios, desocupación) venían dándose en un contexto de "buen momento económico", con lo cual es esperable que aquellos se profundicen, dadas las nuevas estimaciones para 2023.

En ese camino, dada la sequía Massa y el FMI acordaron una reducción de U\$S 2.000 millones en la meta de acumulación de reservas, que será aprobada por el organismo en los próximos días. A cambio, el Fondo exige claridad respecto al sendero de ajuste que recorrerá el gobierno en función del nuevo escenario macroeconómico: sugiere "acciones más sólidas" en torno al recorte fiscal (recortar subsidios de energía, planes sociales e inversión pública), desaconseja medidas como el dólar soja, la recompra de bonos en dólares con reservas y la moratoria

previsional, pues suponen intervenciones estatales en el mercado y/o gastos fiscales extras, y pide "racionalizar" la política cambiaria, un guiño en favor de una devaluación brusca. Tampoco nos perdonó el cobro de las sobretasas que imponen a los países más endeudados (que representan entre U\$S 8.000 y U\$S 10.000 millones adicionales), ignorando que fue el propio FMI quien sobreendeudó a la Argentina. El cuento del "FMI bueno" que nos vendió el FdT era eso: un cuento. Cristina Kirchner anticipa por dónde viene el descalabro y vuelve a criticar el acuerdo, proponiendo una renegociación, como si no hubieran apoyado y sostenido toda la política económica del gobierno, primero de Guzmán y luego de Massa. Más que retocar las metas o renegociar, lo que hay que hacer es anular el acuerdo con el FMI y suspender su pago, según lo que se desprende de todas las investigaciones sobre aquella deuda: que es ilegítima, fraudulenta y una estafa contra el pueblo argentino.

Hay un capítulo especial en torno al endeudamiento externo, vinculado a los intereses de las potencias acreedoras. Las declaraciones de la Jefa del Comando Sur del Ejército de EEUU, Laura Richardson, en enero pasado son ilustrativas: en un evento del Atlantic Council afirmó que América Latina es importante por sus recursos naturales y minerales, especialmente agua, litio y petróleo, sobre los cuales EEUU debe "comenzar su juego". Para EEUU, tener a un país endeudado con el FMI es muy útil para asegurarse la provisión de ciertos recursos clave en el futuro e impedir que China ponga sus manos en ellos. Lo peor: Macri aseguró por decreto (29/2017 y 231/2017) que los recursos naturales sean garantías de la deuda externa. En ese sentido, la deuda funciona como un mecanismo de sujeción: las decisiones políticas y económicas de la Argentina son tomadas de acuerdo a las posibles reacciones del FMI y los grandes bancos y fondos de inversión, en lo que constituye una pérdida absoluta de soberanía.

La deuda en pesos en el mercado local también tuvo novedades. La incertidumbre respecto a lo que sucederá con la política económica en 2024 generaba reticencia en los inversores financieros locales (fundamentalmente bancos) a renovar los títulos que vencen en 2023, lo cual ampliaba la posibilidad de que optaran por cobrarlos (cuando no hay con qué pagarles) para luego volcarse al dólar, lo que aumentaría la devaluación del peso en los mercados paralelos y dejaría al gobierno sin financiación para terminar el año. La "solución" fue garantizar a los bancos el valor y el rendimiento de los nuevos bonos mediante un seguro de liquidez (llamado put) por medio del cual el gobierno se compromete a recomprar

esos bonos en caso de devaluaciones bruscas o saltos inflacionarios. Básicamente, el gobierno que recorta planes sociales y pisa salarios decide disponer de los fondos públicos para proteger al sector más rico y poderoso de la sociedad, mientras el resto de la población queda desamparada.

Mientras tanto, la inflación sigue su curso. El guarismo de febrero (+6,6%) enterró el plan de Massa de bajar la inflación y llegar a un 3% en abril. El programa Precios Justos fracasó en ese propósito, en parte por los trucos empresariales para eludir el acuerdo y por las remarcaciones directas de precios (para colmo, las empresas recibieron acceso al dólar oficial a cambio de su participación en el programa), en parte porque es simplemente un acuerdo de precios que no ataca las raíces estructurales del fenómeno. La deuda del BCRA por leliq y pases diarios asciende a \$12 billones (el doble de la base monetaria) y sus intereses son el principal factor de la expansión monetaria; y una suba de tasas incrementa casi automáticamente esa deuda. En definitiva, la inflación de los últimos 12 meses fue del 102%, todo un récord, y se siente fundamentalmente en insumos vinculados al consumo popular, como alimentos y bebidas. A la inversa, hay actores económicos que se beneficiaron con ella: las grandes empresas y monopolios de la agroindustria y la agroexportación lograron un incremento de los precios relativos de sus productos del orden del 21% y una retracción de los salarios de -13% (según CIFRA CTA-T). En la inflación se disimula una disputa por la distribución de la riqueza, donde ganaron los grandes capitalistas y perdieron los trabajadores. Es un fracaso del mandato del FdT y un asunto que el gobierno, la burocracia sindical, la oposición y los empresarios no quieren ni dar ni resolver.

Además, con esos porcentajes de inflación, las tasas de interés de las leliq pronto quedarán en negativo y tendrán que ser elevadas, pues deben ser positivas según el acuerdo con el FMI, y así lo hizo saber el organismo en su último comunicado. No obstante, una suba de tasas tendría un impacto negativo en la actividad económica, profundizando la recesión prevista pero sin otorgar garantías respecto a la disminución de la inflación; así sucedió durante el gobierno de Macri, cuando hubo estancamiento e inflación. Y la cuestión también es política: la inflación es -por ahora- el síntoma más palpable de la crisis económica y el FdT (y Massa en particular) se juega en ella su legitimidad para continuar siendo gobierno en 2023-2027.

Por otra parte, el panorama mundial no ofrece buenos augurios, pues el sistema financiero enfrenta el peligro

de nuevas burbujas de especulación. Una década de bajas tasas de interés y abundante liquidez ("dinero barato"), dada la emisión monetaria destinada a los rescates bancarios (2008) y a las inyecciones de dinero en las bolsas durante la pandemia (2020), generó un sobreendeudamiento de bancos, empresas, estados y familias y la formación de grandes magnitudes de capital ficticio, con expectativas de valorización futura pero sin correlato con la economía real, es decir, con la producción. Básicamente, una estantería que tambalea. Ahora, la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank (EEUU) y el destino incierto de otras entidades (First Bank, Credit Suisse, etc.) provocaron cimbronazos en las bolsas y cotizaciones de todo el mundo (efecto dominó). La interconexión del sistema financiero y la similitud de los modelos de negocios en el sector bancario-financiero aumentan las posibilidades de que la situación se contagie y devenga en un crack, donde la quiebra financiera de las empresas impactaría en la producción de bienes y servicios, el comercio internacional y el empleo. La contención del fenómeno vía rescates estatales a la banca privada implicaría una enorme transferencia de fondos públicos y un guiño a los bancos para continuar con inversiones riesgosas y otras aventuras, pues tienen la garantía de que serán rescatados por el Estado. En definitiva, el escenario está abierto pero ninguna salida es buena noticia para el país: el pánico financiero empuja a los capitales a irse de los países dependientes hacia los países centrales, y una disminución del ritmo económico mundial implicaría menos demanda de los *commodities* exportables.

Está visto, el escenario económico no es prometedor para los sectores populares, que vivimos de nuestro trabajo y de ingresos fijos y en pesos. No tenemos futuro con una economía en manos de monopolios, banqueros y multinacionales, tutelada por el FMI y conducida por un gobierno amistoso con el gran capital. La única posibilidad para las grandes mayorías está en una rebelión popular que rompa con el imperialismo, defienda la soberanía nacional e instaure una verdadera democracia, para aplicar un programa económico que garantice un inmediato bienestar popular (salarios, jubilaciones, empleo) a partir de la anulación de la deuda y la estatización de los principales recursos naturales, el comercio exterior y el sistema bancario. La tarea de la hora es construir un frente político y social en torno a este programa, para generar las condiciones concretas de su aplicación.

David Paz



Avanzar en la unidad antimonopólica y antiimperialista

Más ajuste

El gobierno nacional cerró en Washington su ronda de negociaciones con el FMI de cara a un nuevo desembolso del organismo. Massa y su equipo se jactan de haber logrado flexibilidad en las metas de reservas del Banco Central, pedido que hizo el gobierno argentino alegando el desbalance en las exportaciones que provocará la sequía. La que no cambió es la meta fiscal: el Fondo exige que se profundice el ajuste. En concreto, pidió que avance en el tarifazo energético, un tema incómodo teniendo en cuenta que, tras el apagón que dejó sin energía a medio país, unas 130.000 familias del AMBA estuvieron sin luz durante alrededor de dos semanas. También se habló de la moratoria jubilatoria, que el FMI aceptó pero pidiendo que se haga de manera "justa", eufemismo para acotar su alcance.

Es decir, la charla con el Fondo ratifica que para el pueblo trabajador viene más ajuste, en el marco de una inflación que en febrero fue de 6,6%, y en donde los alimentos picaron en punta con un 9,8%. Así las cosas, la estafa de los acuerdos paritarios de 60% en cuotas no sobrevivió ni tres meses. La complicidad de la burocracia sindical no alcanza a disimular el malestar que se vive por abajo entre los trabajadores. Algunos gremios, como Bancarios, Luz y Fuerza o los enrolados en la Confederación del Transporte (CATT) salen a pedir compensaciones por el impuesto a las ganancias, una manera elegante de reclamar pero sin romper con la pauta de la ministra Olmos. Lo que es una provocación sin disimulos es la conducta de la ministra Tolosa Paz, que en el marco del plan de lucha piquetero, ataca el derecho de los trabajadores desocupados y precarizados a organizarse con la cantinela de que las organizaciones "usan a los más pobres". Ante la inminencia de la convocatoria al Consejo del Salario, corren rumores de que hay quienes plantean desenganchar el monto de la ayuda social del valor del salario mínimo, lo cual sería un salto en el ajuste hacia los desocupados, pero con el peligro de que ello unificaría a las organizaciones opositoras y acortaría distancias con los movimientos oficialistas.

La democracia, bien gracias

Luego del acuerdo del gobierno con el FMI, La Cámpora emitió un comunicado en donde critica duramente al mismo: allí se explica que "los argentinos votan lo que quieren, pero la economía del país la decide el FMI", para rematar con un "¿La democracia? Bien gracias." Quienes venimos luchando desde el primer día contra el ajuste fondomonetarista, no podemos menos que adherir a esas palabras. Lo que llama la atención -aunque no sea nuevo- es que asuman discursos opositores quienes

integran el gobierno con numerosos funcionarios, empezando por la Vicepresidenta. Cacarean pero sin romper, por eso no mencionan a Massa: por el contrario, cada vez que pueden llenan de elogios a quien capitanea la relación con el Fondo.

Y si bien no rompen, juegan con fuego. El kirchnerismo no solo se la agarra con Alberto Fernández y sus ministros afines, sino que además empezó la interna puertas adentro. Por un lado Máximo se cruzó con funcionarios de Kicilloff; de otra parte, el "cuervo" Larroque lanzó su agrupamiento "La patria es el otro" mientras el ministro Wado de Pedro se saca fotos con dirigentes ruralistas en Expoagro. En ese marco, la campaña "contra la proscripción" de Cristina no cobra volumen dentro del peronismo. Ahí estuvo Estela Carlotto poniendo los puntos respecto del carácter del 24 de Marzo. Con CFK tocada tras la condena en la causa vialidad, el kirchnerismo profundiza su esquizofrenia y recalienta la interna del oficialismo.

No le va mucho mejor a la coalición opositora. Con las candidaturas de Bullrich y de Larreta ya rodando, en JxC se siguen sacando los ojos. En las últimas semanas la nota la dio la UCR. Mientras Gerardo Morales se esfuerza en llevar al partido a una candidatura propia en el marco de la alianza, un puñado de dirigentes radicales compartieron acto con Bullrich.

Más allá de los reflejos de supervivencia, del cálculo por los cargos y del oportunismo a prueba de todo que impera en la dirigencia política, en las dos grandes coaliciones las discusiones sobre abrir o cerrar grietas, poner orden o alcanzar acuerdos, etc, son el reflejo de una crisis que se agiganta a cada paso. Así lo expresa un diario de tirada nacional en su nota del editor: "El gobierno que asuma el 10 de diciembre se encontrará con un gravísimo déficit fiscal, un dólar oficial retrasado y reservas inexistentes" (La Nación, 14/03/23). A este pedido poco disimulado de un ajuste brutal, tenemos que enmarcarlo en un contexto internacional dado por la continuidad de la guerra y por la reciente inestabilidad financiera en EEUU; pero sobre todo en el plano local por una lucha popular que, con sus altibajos, no puede ser domada.

Como sea, mientras acomodan sus internas, en las presidenciales de este año los argentinos tendremos libertad para elegir entre los responsables del actual desastre y los responsables del desastre que dejó el gobierno anterior. ¿La democracia? Bien gracias.

Cada vez más a la derecha

Lo que para el pueblo es un padecimiento para otros es una gran oportunidad. En un contexto de inflación altísima, los formadores de precios están

de parabienes con las remarcaciones constantes. Se trata de los grupos monopólicos de la producción y venta de alimentos. Mientras para ellos hay superganancias, para los de abajo hay precios cuidados, justos, congelados u otros adjetivos con los que no se resuelve el problema de parar la olla. También está la banca y los grandes tenedores de dinero a nivel local, que con los canjes de deuda interna del gobierno se aseguran altísimas ganancias a corto plazo. Ni siquiera la pasan mal los incumplidores como Edesur: la empresa en manos de capitales italianos se prepara para la venta de sus activos. Con el daño que le causa a cientos de miles de familias sin luz, correspondería de mínima intervenirla de inmediato, si no expropiarla sin más. Pero en su momento, la conducta pusilánime hacia Vicentin dejó claro cómo trata este gobierno a los grandes.

Donde el oficialismo cede en toda la línea a las corridas por derecha es en el tema de la seguridad. Semanas atrás, el organismo nacional de control a cargo de las armas autorizó la compra de las taser al gobierno porteño, lo que allana el camino para que se empiece a usar esta pistola que dispara electricidad, una suerte de picana eléctrica móvil.

El hecho quedó opacado porque al mismo tiempo se estaba debatiendo el problema narco. Ninguno de estos gobiernos va a tocar el tema de fondo, que es el del control del río Paraná, con terminales privadas que dibujan declaraciones juradas para exportar cualquier cosa sin rendir cuentas seriamente. Mucho más sencillo es hablar de gendarmes, como si las fuerzas de seguridad no fueran cómplices del narcotráfico. Pero ahora el gobierno dio un paso más y convocó al Ejército a realizar tareas civiles. Alberto Fernández declaró que son "las FFAA de nuestra democracia", el ministro de Defensa Taiana se expresó en el mismo sentido, y hasta el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Paleo, abrió el paraguas diciendo que la tropa a su mando no está preparada ni instruida para intervenir en seguridad interna. Pero además de ceder al discurso por derecha, el primer paso para lanzar a la milicada a la calle está dado, más allá de la tarea que se le asigne. De los ingenieros urbanizando barrios a los operativos de seguridad que reclama Bullrich, el camino puede ser peligrosamente corto.

Porque el problema no es solo el narcotráfico. También -y sobre todo- es el cansancio popular. La respuesta que generó el crimen del niño de 11 años, con los vecinos del barrio derribando un búnker que era defendido a tiros por sus ocupantes, debe ser reivindicada. El día posterior a los hechos la prensa titulaba que "Hay riesgo de estallido cuando el Estado no está y el crimen avanza" (La Nación, 7/03/23). Hay ries-

go de estallido, sí, pero no solo por el crimen, cuando lo que avanza es el hambre, la pauperización de la vida y sobre todo la bronca.

Unificar a la lucha popular

El año comenzó caldeado y no solo por las temperaturas. El plan de lucha piquetero, que se desarrolla en todo el país con centro en Desarrollo Social, vuelve a poner a la calle como escenario de disputa. En medio de la ola de calor, estudiantes y docentes de la CABA y varios puntos del Conurbano bonaerense salieron a denunciar las condiciones deficientes en las que se estudia y se enseña. Gran mérito de la docencia, el de instalar el debate de que hay situaciones extremas en las que no se puede trabajar igual que todos los días, cuestión que el avance de la precarización y la flexibilización laboral pretenden naturalizar, en la educación pero también en otros rubros. En los barrios en los que la luz no vuelve, el reclamo de los vecinos toma forma de cortes de calles y escraches a las oficinas de Edesur, aun enfrentando la represión. Los reclamos por las condiciones de vida se enmarcan en los problemas estructurales del país, con eje en la soberanía y la entrega. La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda retomó la iniciativa con un importante plenario, en el que lanzó la jornada de lucha del 12 de abril en el marco de la "reunión de primavera" del FMI.

Es el camino por el que hay que avanzar: el de unificar y darle cuerpo orgánico al programa que de hecho se viene levantando en la pelea del pueblo, ligado además del tema de la deuda, a la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos. Son los puntos que unifican a la lucha popular, en dirección a un gran frente de liberación nacional.

A días de un nuevo aniversario del 24 de Marzo, la reivindicación de los 30.000 detenidos desaparecidos, entre ellos nuestros camaradas de Vanguardia Comunista, nos anima en la pelea por la conquista de una verdadera democracia. La enorme conciencia antigolpista y democrática de nuestro pueblo se volverá a expresar en Plaza de Mayo y las principales plazas del país. Pero no vale la pena desperdiciar ese torrente en defender este régimen en el que los monopolios y el imperialismo toman las decisiones centrales. La lucha por una democracia popular, de nuevo tipo, está directamente ligada a fortalecer un proyecto que siga peleando por la Revolución, la Liberación y el Socialismo. Hacia ese norte el PRML orienta su esfuerzo y su entusiasmo militante.

Agustín Damaso

Epitafios de impunidad: Blaquier murió sin condena

Un epitafio es una escritura sobre la muerte. La inscripción se da habitualmente sobre una lápida con el nombre de la persona difunta pero puede tener otras expresiones. En Argentina los diarios tienen su sección de avisos fúnebres donde unas pocas palabras honran o despiden a los muertos. De las infinitas consecuencias que tuvo la dictadura en nuestro país puede tomarse la arista de lo que significó para el pueblo no tener un lugar donde realizar una inscripción para todos aquellos compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos.

Por esta vía de epitafios e inscripción de la muerte, puede verse hoy la impunidad de la gran burguesía monopólica, sus representantes y aliados políticos. El 13 de marzo de 2023 murió Carlos Pedro Blaquier, uno de los representantes de esa clase social. Murió sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad como cómplice primario en la Noche del Apagón durante la última dictadura militar.

Los saludos-epitafios que le fueron dedicados abarcan a un amplio espectro de las clases dominantes. Macri describe a Blaquier como "uno de los empresarios más importantes del país y un referente de la agroindustria". La-

rreta por su parte habla de un "triste momento" y despide a su familia con "mucho cariño". Inscripciones de múltiples sectores empresariales como Paolo Rocca (Techint) Luis Pagani (Arcor) o Juan Carlos Bago (laboratorios Bagó). De herederos de la dictadura como los familiares de Martínez de Hoz, Domingo Cavallo, universidades privadas, los directivos de la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y un largo etcétera. De alguna manera, esos escritos configuran y concentran a los garantes de un modelo de Argentina dependiente atada al imperialismo.

Blaquier fue un colaborador activo en la Noche del Apagón en Libertador General de San Martín y Calilegua, Jujuy, donde secuestraron a 400 personas -de las que 55 continúan desaparecidas- en la semana del 20 de julio de 1976 con los autos del Ingenio Ledesma. Ello se entiende en el marco de que el finado ocupó el puesto de director de la empresa por 43 años, acomodándose a todos los gobiernos. En 1974, meses antes de retornar a la presidencia, Perón le regaló su bastón de mando. Del kirchnerismo supo opinar que "pocos gobiernos han defendido la industria nacional como este": quizás haya incidido en esa valoración el hecho de que,

por aquellos años, Ledesma se vio favorecida en los repartos de cupos para el abastecimiento de bioetanol.

La empresa no solo produce azúcar sino que se ha diversificado a otras ramas y provincias. Papel y cuadernos que llevan la firma Ledesma, alcohol, almidones, jarabes, aceite, frutíferos; desde el 94 participa en el negocio de los hidrocarburos, concentra tierras para la producción agrícola y ganadera, y en el 2010 inauguró una planta de bioetanol. Todo este desarrollo sobre la sangre derramada de una generación y sus ideas.

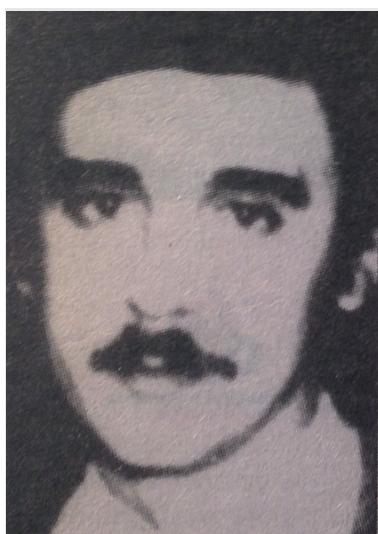
En el año 2012 Blaquier y Alberto Lemos, administrador del Ingenio, fueron procesados por los hechos de la Noche del Apagón. Tras la apelación de la defensa, en 2015 la Cámara de Casación dictaron la falta de mérito para ambos. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema en 2022. A partir de allí la estrategia de la defensa fue alegar que Blaquier no estaba en condiciones de afrontar el juicio por problemas de salud. Plan exitoso: Blaquier se murió impune.

Pero la impunidad no es suficiente para borrar la experiencia del clasismo y el desarrollo de un proyecto de liberación

nacional y social que tuvo sus bases en el Cordobazo, en el Sitrac-Sitram y en la generación del 60 y del 70. Que no solo luchó contra la dictadura sino que elaboró las bases para una disputa que todavía está abierta. De esas experiencias quedan las lecciones para la construcción de un sindicalismo antiburocrático, combativo y por el clasismo gracias a compañeros que se organizaron en el ingenio Ledesma como Jorge Weisz y Carlos Patrignani de Vanguardia Comunista, quienes confluyeron con los referentes de distintas expresiones populares, cuya figura más importante fue el radical Luis Arédez. Experiencias que además de las luchas tienen la perspectiva de la revolución. Los Weisz, los Patrignani, los Arédez; todos los represaliados por el empresariado que se enriqueció con la dictadura, van a estar marchando junto a cientos de miles en todo el país este 24 de Marzo. Siguen vivos, porque cayeron defendiendo una causa inmortal. Los herederos políticos y económicos de los Blaquier todavía tienen cuentas sin pagar, que más temprano que tarde serán cobradas por la lucha popular con los trabajadores a la cabeza.

Gabriela Pintos

¡Jorge Weisz, Carlos Patrignani, Luis Arédez, presentes!
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes!
¡Cárcel a todos los milicos y los civiles colaboradores y beneficiarios!
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciamos.



Memoria por Raúl Kossoy

El 11 de marzo fue colocada una reposición de la Baldosa por la Memoria en homenaje a nuestro camarada Raúl Kossoy. El acto organizado por Memoria Palermo y Barrios x Memoria y Justicia se realizó en Cabildo 96 de la CABA, lugar en donde Raúl vivió.

Kossoy era dirigente partidario en la zona de San Francisco Solano, en el Gran Buenos Aires. Fue secuestrado por la Triple A el 19 de octubre de 1975 junto a su camarada Ana María Estevao. Ambos fueron asesinados. 43 años después, ambos siguen vivos en la memoria y en la lucha popular.

¡Camarada Raúl Kossoy, presente!

Compañeros y compañeras de Vanguardia Comunista

¡PRESENTES!



Rosario: fuerzas federales y armadas

En el **no transar** anterior advertíamos “*un antes y un después en el escenario de la ciudad*”, cuando el 1º de febrero el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano a manos de la disputa de las bandas narcos expresaba “*un elemento cualitativamente distinto por ser novedoso, implementando en los hechos nuevos límites de la impunidad con la que opera el narcotráfico*”. Y es que Rosario sigue contando sus muertos, mientras el país mira por televisión con temor lo que se vive.

Además, están las corrientes políticas que expresan a las clases dominantes del país, buscando sacar provecho electoral de la situación en un año de elecciones, fomentando una política represiva hacia los sectores populares. Es en este marco que el gobierno nacional pactó con el gobernador Omar Perotti el envío de la gendarmería y de las FFAA a Rosario. Respecto al ejército, más allá de que no estén armados y que desembarcan con la misión de realizar tareas de ingeniería social en los barrios, es lastimoso que el FdT y en específico Jorge Taiana, a quien respetamos en varios de sus posicionamientos, genere las condiciones para amigar a la ciudadanía con los militares. Con dicha iniciativa sientan las bases propicias para que las ideas de la derecha de Patricia Bullrich o Javier Milei penetren en la población. En todo caso el gobierno debería impulsar medidas que orienten al ejército en función del conflicto con las potencias externas, para la defensa de la soberanía nacio-

nal, para terminar con la pesca ilegal de los buques imperialistas en nuestros mares, por ejemplo.

Pero, ¿cuál es el verdadero propósito detrás de la política del gobierno? ¿Por qué las fuerzas federales y el ejército deberían aportar soluciones? Si han sido históricamente una herramienta al servicio de las clases dominantes para defender al régimen capitalista dependiente, reprimiendo a sangre y fuego a generaciones de militantes populares, patrióticos y revolucionarios. Así jugó un rol en todas grandes las represiones al movimiento obrero, así como en todas las dictaduras cívico-militares, incluida desde luego la del '76, orquestada ni más ni menos que por el imperialismo yanqui y la gran burguesía local. Siempre que la bronca crece y los estallidos populares se producen, las fuerzas federales y armadas están presentes para defender al régimen político en decadencia. Y en la Argentina de hoy, la pobreza es vivida por casi el 50% del total de la población, sin perspectivas de que esto mejore pronto.

En realidad, las clases dominantes están preocupadas por el caldo que se está cultivando en Rosario para un posible estallido social, como lo demostraron los vecinos hartos de la situación en un barrio de la ciudad, Empalme Graneros, derrumbando un bunker y, de esta manera, auto defendiéndose de los narcos. Ahí está la grieta: entre los que le dan de comer al narcotráfico y los que lo enfrentan con acciones concretas para transformar la realidad.

Y queda claro que en tanto y en cuanto no se golpee a los sectores responsables de esta situación, no habrá un freno al flagelo y consecuencias que deja el mercado de la droga.

No obstante, para pensar en posibles soluciones hay que preguntarse: ¿cuál es el origen del problema? Si el narcotráfico crece, el excedente que genera la producción, distribución y venta de estupefacientes crece también, y en dólares. Y si crece, es porque se expande hacia afuera del territorio nacional, buscando exportar estupefacientes hacia otros países. Una de sus principales salidas es a través las terminales portuarias del Gran Rosario, en manos de grupos económicos concentrados, extranjeros y locales.

Además, hay que investigar y seguir la ruta del dinero, ya que la plata ilícita se blanquea a través de casinos, negocios inmobiliarios y financieros, como el caso reciente que involucra a Gustavo Pedro Shanahan, director de la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2013 y desarrollador inmobiliario, y a Patricio Carey, vicepresidente de una financiera que tenía a un reconocido narco entre sus clientes.

En consecuencia, para enfrentar al narcotráfico es necesario batallar en dos aspectos. Uno económico y otro cultural. En primera instancia es necesaria la derogación del decreto 949/20 para que el estado argentino recupere el control sobre los puertos y el comercio exterior del país. Evidentemente, las medidas aisladas no podrán subsanar

el problema a la crisis profunda actual. Por eso también, es imprescindible ejecutar un programa integral, un conjunto de medidas económicas orientadas a promover la creación del empleo, la defensa del salario, la reactivación del mercado interno y el desarrollo industrial autónomo. Solo un programa popular, antimperialista, patriótico y revolucionario podrá enfrentar el verdadero problema del narcotráfico para sepultar el negocio y sus consecuencias mortales para la población.

Por otro lado, se ha anclado la imagen positiva de ser narco en la juventud. En este terreno también es donde el partido debe batallar ideológicamente para transformar una cultura que exalta a la figura del narco, oponiéndole como antítesis la construcción de una juventud revolucionaria y antimperialista, que se constituya como fuerza y motor de la vanguardia necesaria para la aplicación del programa de liberación nacional y social.

En el mes en el que se cumplen 47 años de la última dictadura cívico-militar, levantamos bien en alto las banderas de la generación del 70' y del proyecto revolucionario y antimperialista que rompa con los lazos de dependencia, generando las bases para la construcción de una nación políticamente soberana, independientemente económica y socialmente justa, camino a la construcción de una sociedad socialista.

Esteban Pietri

Juicio al espía Balbuena

El pasado martes 14 de marzo comenzó el juicio al espía Américo Balbuena, el miembro de la Policía Federal que durante 11 años estuvo infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, acusado de espionaje ilegal a organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. El juicio también tiene como acusados a los dos ex jefes de Balbuena: Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares. Todos miembros del cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. La causa está en Comodoro Py a cargo del juez Rafecas.

En un nuevo capítulo del espionaje a organizaciones populares, en 2013 salió a la luz que Balbuena era miembro del cuerpo de informaciones, mediante una filtración que surgió de una interna de la Policía Federal. Tres años antes, el interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria denunciaba sobre la existencia del cuerpo de informaciones de la PFA, hasta ese momento desconocido. Según Marcelo Saín, la información le había llegado en un sobre cerrado enviado a su domicilio. Otra interna de servicios de la PFA que también se vio en el caso del agente José Alberto Pérez, conocido como losi, que estuvo infiltrado en la comunidad judía por 15 años; y en la reciente denuncia de “Isabelita”, una agente de la fede-

ral encubierta desde 1969 hasta inicios del 2000, a la que le atribuyen -entre decenas de cosas más- haber estado infiltrada en Iglesia Santa Cruz en 1978, realizar investigaciones sobre el MTP -meses antes de lo sucedido en la Tablada- y sobre nuestro fallecido camarada Oscar Kuperman en los 90.

Volviendo a Balbuena y a la causa en marcha. Si bien hay un intento de excluir las actividades de Balbuena y de sus dos jefes por fuera del cuerpo de informaciones de la federal -de hecho, parte de la estrategia de la defensa es sostener que Balbuena tenía al periodismo como un hobby al que se quería dedicar luego de su retiro- lo cierto es que el punto nodal es la propia existencia del Cuerpo de Informaciones. Esto es vital a la hora de marcar que el espionaje de Balbuena no es ilegal porque actuó por fuera de sus funciones, sino que son sus funciones las que de manera delimitada constituyen el espionaje ilegal.

Sin ir más lejos, el propio Decreto-Ley 9.021/63 promulgado durante la dictadura de Onganía -aún vigente- que crea el Cuerpo de Informaciones se encarga de darle la potestad de no someterse al control de ningún organismo estatal y permitirles a sus agentes la infiltración en organismos públicos y

privados. Esto último es un paso más de lo que la propia AFI -ex SIDE- tiene reglamentado. El decreto de creación del Cuerpo de Informaciones, como así también su reglamentación y la creación del cuerpo de Auxiliares de la Federal, constituyen lo que hay detrás del caso Balbuena. Es el aparato del Estado puesto al servicio del espionaje político. Balbuena en todo caso es el ejemplo concreto de que lo llamado por Aníbal Fernández como inteligencia criminal -hace unos días al responder preguntas en la Cámara de Diputados- no es otra cosa que lisa y llanamente espionaje político. El ministro tampoco puede responder ante la clara responsabilidad de miembros de la Federal en la segunda desaparición de Julio López.

El juicio además de estar marcado por dilaciones innecesarias, tiene un detalle a señalar: todos los allanamientos y pericias, a pedido del juez de instrucción, fueron realizados por la gendarmería y -en su gran mayoría- se realizaron durante el 2013. Un año después de que salga a la luz el “Proyecto X”. Proyecto llevado adelante desde el 2004 al 2012 por distintas dependencias de dicha fuerza y que incluyó el espionaje a más de mil organizaciones políticas, sindicales y populares, asambleas de trabajadores y estudiantes. Fue justamente

con el Proyecto X y la designación de Milani, cuando se terminó de caer el discurso de los derechos humanos del gobierno K.

El juicio a Balbuena, si bien es emblemático por ser el primero a un infiltrado en período democrático, tiene sus claras limitaciones. Porque, ni más ni menos, los que faltan en el banquillo de los acusados son los responsables políticos. No están acusados nadie de la cúpula de la Policía Federal ni del Ministerio de Seguridad de la Nación de aquel momento, organismos de los que depende directamente el Cuerpo de Informaciones de la PFA. El punto es que Balbuena no es la excepción, es la regla y hay muchos Balbuenas, todos dirigidos por el aparato represivo del Estado.

A días de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar, seguimos reivindicando la defensa de una de las libertades democráticas básicas: el derecho a la protesta, un punto central en este 24 de Marzo que nos tendrá movilizándolo en todo el país. La condena a Balbuena debe servir para seguir atacando esa estructura diseñada para espiar a las organizaciones populares.

Martina Bas

Docentes CABA

Así no se puede

La ola de calor que azota al país dejó al desnudo la precariedad de las condiciones en las que se enseña y se estudia en la CABA.

El discurso de campaña de Rodríguez Larreta centrado en la importancia de la educación choca de lleno con el estado de las escuelas bajo su gobierno. Los problemas que hacen específicamente al calor, como la falta de ventilación adecuada o de ventiladores, o los techos de materiales que concentran calor, se enmarcan en fallas de mantenimiento muy serias. La Isaura Arancibia de San Telmo estuvo cerrada más de 10 días por un desborde cloacal. La escuela 16 de Balvanera fue evacuada la semana por un incendio, provocado por una explosión de un transformador. En el marco de la disputa dentro del oficialismo porteño y de la interna de JxC, a Larreta lo corren por "tibio". Así las cosas, su ministra Acuña no piensa retroceder un paso en su cruzada por los 190 días de clase.

El calor extremo trajo los cortes de energía. Con los cortes de luz y de agua -sobre todo en la zona sur de la ciudad- varios directivos de escuelas decidieron suspender las clases, lo que provocó el apriete de las supervisiones alineadas con Acuña. Según cuentan docentes, a algunos rectores les dijeron que ante la falta de agua "había que

llamar a los bomberos". No fue esto lo más insólito. Tras la aparición de alacranes en el Lengüitas, el ministerio de Educación programó dos desinfecciones en horario de clases sin suspender las actividades, es decir, con estudiantes y docentes dentro de las aulas. 190 días a capa y espada.

Las altas temperaturas generaron descompensaciones de grandes y chicos, principalmente en las escuelas de mayor precariedad edilicia. Fue el movimiento estudiantil el que primero activó frente a la situación: los centros de estudiantes de varios colegios realizaron asambleas para organizar sentadas y faltazos masivos.

La respuesta sindical

La situación generó una bronca muy grande dentro de la docencia, que ya viene golpeada con una paritaria por debajo de la inflación de estos meses. En las escuelas se suceden las asambleas, a veces impulsadas por delegados, otras veces autoconvocadas.

La respuesta de UTE estuvo muy por debajo de la situación. El gremio mayoritario convocó una reunión con familias, de la que salió un modelo de nota para presentarle a las autoridades escolares frente a condiciones adversas. Es decir, dejar a cada escuela a su pro-

pia iniciativa, para que cada docente se arregle con sus directivos. Por fuera de eso, hicieron una conferencia de prensa. Luego de haber rechazado la paritaria sin convocar a medida de fuerza -regalándole a la precandidata Acuña la foto del primer día de clase sin paro-, nuevamente la línea de denunciar pero sin acciones de lucha muestra ser inútil para enfrentar al gobierno porteño. El paro convocado por Ademys el martes 14 contó con una muy alta adhesión, a pesar de haber sido impulsado por solo ese sindicato.

La docencia tiene que salir a reclamar por inversiones en infraestructura que garanticen de verdad, sin chamuyos, el derecho a la educación. Se plantea a su vez un debate más profundo, que hoy toca a la educación pero es mucho más abarcativo: no se puede trabajar si no hay condiciones adecuadas. Se trata de un problema que se extiende por todo el arco del trabajo precario y flexibilizado, del cual la actividad docente es parte.

En ese camino, es necesario combatir la visión derrotista que impulsa la conducción de la UTE, respecto de que el paro pone a la sociedad en contra de los docentes. Primero que plantea como absoluto un hecho que no siempre es así: son varias las escuelas en las que las familias apoyan a los maestros en

sus medidas. Segundo, que pensar la acción sindical en esos términos es un engaño. El aislamiento o la aceptación de una medida de fuerza -y de un paro en particular- está dado principalmente por el grado de conflicto que se desarrolla entre los trabajadores. Con la disconformidad que causa el techo salarial en casi todos los gremios, con vecinos que cortan calles porque no tienen luz, en medio de un plan de lucha piquetero, plantear que un paro docente va a caer mal en la sociedad se parece bastante a una excusa para no escupirle el asado a Larreta y Acuña.

La ola de calor va a pasar, pero la infraestructura precaria va a quedar. Hoy es el calor, mañana va a ser el frío; hoy son alacranes, mañana son ratas: en la CABA se da clases en condiciones de precariedad. Las asambleas y los plenarios de delegados deben discutir cómo darle forma a un plan de lucha que contenga este punto junto a la recomposición salarial, sin darle tregua a un gobierno que, en medio de su interna, está en mejores condiciones de ser derrotado.

Facundo Palacios

Sobre el paro de colectivos en el AMBA

Impulsar la organización por abajo

El viernes 3 de marzo la oposición dentro de la UTA volvió a realizar un paro por 24 horas. Se trata del sector liderado por Bustinduy, con base en las líneas que maneja la empresa DOTA. Se trata del segundo paro que convoca este sector. El anterior coincidió con el comienzo de clases en la CABA, el 27 de febrero: planificada o de carambola, la coincidencia le dio a la medida un alto impacto.

El sector de Bustinduy denuncia los acuerdos paritarios firmados por la conducción del sindicato. También se suma que en las pasadas elecciones, la oposición ganó en cinco seccionales -Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán- sin que la conducción nacional les permitiera asumir. Esto pasa porque los estatutos del gremio, contrariando las leyes laborales y los fallos judiciales, plantea que el ganador a nivel nacional gana también las seccionales: un estatuto hecho a medida de una burocracia recalcitrante. Ante esta situación el Ministerio de Trabajo se lava las manos.

Bustinduy y DOTA

Miguel Bustinduy fue secretario de organización de la UTA bajo la conduc-

ción de Roberto Fernández, quien sigue siendo el titular de un sindicato en donde se hace todo lo posible por pulverizar todo atisbo de oposición. Bustinduy rompió con Fernández en 2019; desde ese momento viene impulsando distintas medidas de fuerza sin el aval de la conducción. Ese año tomó la sede de la UTA, uno de los hechos más memorables de ese enfrentamiento.

Bustinduy no viene precisamente del combativismo. Es pública su buena relación con los directivos de DOTA, grupo que viene acaparando líneas de colectivo en el AMBA en los últimos años, marcados por la quiebra de varias empresas. DOTA controla 180 de las 390 líneas operadas sólo en el AMBA. Además es dueña de Megacar, representante de la empresa brasileña Agrale en Argentina y controla la carrocería de ómnibus TodoBus.

Más líneas concentra DOTA, más poder obtiene para presionar sobre el Estado en el tema más sensible del rubro: el de los subsidios. En recientes declaraciones radiales, Fernández dijo que la empresa recibe \$7.000 millones mensuales por ese concepto. Según denunciaron el año pasado los delegados de la línea 60 en un comu-

nificado, la empresa recaudó en 2019 más de \$2.000.000 por coche y recibió más de \$3.150.000 en subsidios por coche, además de generar más de \$6.800.000 por la venta anual de boletos y de recibir una compensación de más de \$10.600.000 del Estado por los mismos. Los delegados agregan que los datos surgen de una auditoría del Ministerio de Transporte, ya que la empresa no publica balances.

El paro de febrero fue levantado a las pocas horas luego de que se firmara un acta entre el Ministerio de Trabajo, DOTA y la UTA en la que el gobierno se comprometía a saldar una deuda con la empresa. El pago del acuerdo paritario -motivo por el que se convocó al paro- quedaba subordinado a la efectiva cancelación de esa deuda.

Una salida de los trabajadores

El sindicalismo empresarial de Bustinduy no es una representación legítima de los intereses de los choferes. Sin embargo, la fuerte disputa dentro de la burocracia abre una veta para la organización por abajo.

Así se pudo ver durante las medidas de fuerza, en las que pese al férreo control del sector de Bustinduy sobre la medida, también hubo espacio para las asambleas y las autoconvocatorias. Incluso en líneas controladas por el sector de Fernández hubo delegados planteando las miserias del acuerdo paritario.

La interna por arriba debe ser aprovechada para que surjan delegados que representen a los trabajadores. Las experiencias más avanzadas en este gremio, hoy aisladas, tienen un rol para jugar en este camino, en dirección a conformar un sindicalismo que dé pelea por las condiciones laborales y el salario, y que también se ponga como norte discutir cómo los trabajadores aportan a las grandes tareas nacionales para la liberación.

Matías Maidana

Docentes Córdoba

La docencia pelea contra salarios de miseria

Desde finales de febrero las escuelas de Córdoba se encuentran en pie de lucha por un verdadero aumento salarial y de jubilaciones. Con dos paros de 24hs. de altísimo acatamiento y masivas movilizaciones, con un importante componente autoconvocado, las bases batallan por la profundización de un plan de lucha que le tuerza el brazo ajustador al gobernador Schiaretti.

Las escuelas ya rechazaron la propuesta

El martes 14 de marzo la Asamblea Provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) volvió a iniciar las consultas ante la presentación de una "nueva" propuesta por parte del ejecutivo provincial. Ante la negativa de las escuelas frente al ofrecimiento original de un 40% para julio en cuatro cuotas (10%- febrero, 8%- marzo, 12%- mayo y 10%- julio), el gobierno provincial tan solo adelantó el último tramo a junio, dejando intacto el porcentaje.

El ofrecimiento no cierra por ningún lado teniendo en cuenta que para no ser pobre hoy se necesitan \$182.452 y los salarios de los cargos testigos de una maestra de grado de primaria sin FONID y el de profesor de media con 30hs. sin FONID se ubican en torno a los \$118.000 y \$151.000, respectivamente. Ambos con saldos negativos respecto a la Canasta Básica Total. Ni siquiera cobrando el lleno del 40% en julio (\$149.760) alcanzaría para que una maestra supere la línea de la pobreza.

Por su parte, la conducción celeste de UEPC se abroqueló al techo del 60% de Massa y la CTERA, apuntando a actualizaciones y cláusulas de garantía frente a la inflación, desconociendo la profundización de la brecha entre el salario y la línea de pobreza.

Como si fuera poco, el INDEC publicó el martes 14 la inflación de febrero, alcanzado la misma un 6,6%, jalonada fundamentalmente por el rubro alimentos que trepó hasta el 9,8%, perforando los dos dígitos la interanual. Mientras tanto, en la Provincia de Córdoba el índice de precios al consumidor registró un aumento de 7,54%, un punto más que la media nacional (IPC, feb 2023). Con estos números, no hay optimismo oficialista que aguante y se desmorona la proyección del gobierno nacional que avizoraba un 60% de inflación anual.

La situación de la educación en la provincia

De acuerdo al informe publicado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (marzo 2023), en los últimos cinco años las paritarias docentes arrojan en la provincia un resultado negativo de 10%, descontando el efecto inflacionario. A través de la disminución del peso de los ítems bonificables como son la antigüedad y la zona desfavorable en favor de los ítems no bonificables como el estado docente, material didáctico, etc., el gobierno provincial aplica el ajuste en los salarios y jubilaciones. Ajuste que impacta doblemente en docentes con mayor antigüedad y que alcanza el 30% si tenemos en cuenta el ítem zona desfavorable.

En relación al presupuesto, los datos muestran también una caída en términos reales para el periodo 2016 – 2023



de un 11% a lo que debería sumársele la sub ejecución presupuestaria que fue de un 4,5% anual.

Un dato relevante que se desprende del informe (OTES, marzo 2023) es en relación al gasto anual por estudiante de escuela pública, que en el 2020 ubicó a Córdoba por debajo del promedio nacional y junto a las cinco provincias que menos fondos destinan (Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero).

Por último, elocuentes son las cifras que explican la precarización y sobrecarga laboral creciente en la docencia. Es que desde 2017 al 2021 hubo una pérdida de unidades educativas y de servicio frente a un aumento de la población que asiste a las mismas, es decir, menos escuelas para más alumnas y alumnos. A su vez, hubo una notoria reducción de cargos (-3764) pero un aumento de la cantidad de horas cátedra para los docentes que ya estaban en el sistema (de 14,4 a 16 hc.). Esta concentración de horas se explica en la necesidad de trabajar más para redondear un sueldo mayor que parte de un piso bajísimo.

Plata para los monopolios, pero no para educación

A pesar de las declaraciones del ministro de Educación Grahovac y el gobernador Schiaretti, lo cierto es que plata hay. Las arcas provinciales vienen experimentando un incremento en términos reales de la mano del aumento de la coparticipación del IVA y ganancias. Además, con el aumento de la inflación también se incrementa la recaudación. A los considerables montos para la publicidad oficial y los negociados de la "obra pública" se suma una política impositiva que privilegia a los monopolios, destinándose millones de pesos a las terminales automotrices, Fiat-Iveco, Renault, Volkswagen, el sector alimentario encabezado por Arcor y las grandes empresas que cartelizan el complejo agroindustrial exportador, mientras la docencia y estatales no al-

canzan a cubrir ni siquiera la Canasta Básica Total.

Unidad de los que luchan para quebrar el ajuste

Hace años que las y los trabajadores de la educación venimos perdiendo frente a la inflación y las devaluaciones que se vienen ejecutando desde el gobierno nacional. Ahora bien, sabemos que no basta con un paro para torcer el brazo del gobierno provincial, es necesario un plan de lucha de corto y mediano plazo que levante como consignas principales: Salario básico inicial igual a la canasta básica total con cláusula gatillo; y el reclamo por el 82% móvil para las y los jubilados. También entendemos que estas consignas de hacerse efectivas, sólo serían un paliativo a la crisis mientras no se resuelvan los problemas de fondo. Porque mientras haya inflación y no se ataquen las variables estructurales de la economía no se solucionará definitivamente el problema salarial. En este sentido, la única forma abordar el problema del persistente deterioro salarial es terminar con las condiciones estructurales que lo provocan: la concentración y extranjerización de las principales ramas de la producción y la usuraria y fraudulenta deuda externa, de lo cual resultan la apropiación y concentración de las riquezas en pocas manos. Sin saldar estos aspectos económicos no se podrá terminar con el problema inflacionario y la pobreza que crece año a año en nuestro país, cuestiones que según el gobierno y la oposición sólo se resuelven con ajuste y más ajuste sobre el pueblo.

Es imperioso avanzar en un plan de lucha que unifique a las y los trabajadores y dar la pelea por una salida popular a la crisis.

Cándido López

“Vagos de mierda”

¡Vayan a trabajar, vagos de mierda!” Estas fueron las palabras del gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, hacia los docentes que se encontraban realizando un reclamo salarial.

La paritaria de esa provincia dicta que habrá un aumento de \$24.000 en dos tramos, en concepto de sumas fijas. Esta miseria fue rechazada por la Asociación de Maestros y Profesores, que lanzó una medida de fuerza para el no inicio del ciclo lectivo.

En el marco del paro del miércoles 15, la docencia se movilizó hacia el Paseo Cultural Castro Barros, en donde el gobernador asistiría a la presentación de un libro de su par chaqueño Capitanich. En ese contexto se dio el encontronazo con los docentes y las declaraciones del mandatario provincial.

Que luego haya pedido disculpas vía redes sociales no alcanza para esconder el desprecio que esta dirigencia política siente por la docencia, y a través de ella por los trabajadores en general. Quintela se alza así como una suerte de Soledad Acuña pero más desatado. Recordar que la ministra porteña humilla a los docentes cada vez que puede: lo último que dijo la semana pasada es que “los docentes no están preparados para la escuela del futuro”, siendo que ella ni siquiera tiene formación en el área. Para despreciar laborantes no hay grieta.

Que la bronca que generan estos personajes sirva para darle impulso a la lucha salarial y por condiciones dignas de trabajo, pero sobre todo para fortalecer una pelea de fondo: que esta gente no nos gobierne más.

Corresponsal



Chaco

Pueblada en el Impenetrable

Misión Nueva Pompeya es una localidad y municipio ubicada al norte de Chaco, distante a 185 Km de Juan José Castelli, la puerta al Impenetrable, y a 480 Km de Resistencia, la capital provincial. Fue allí donde tuvo lugar la pueblada el 4 y 5 marzo pasado. La desaparición de un menor de la comunidad y la falta de respuesta del gobierno de Jorge Capitanich explica la justicia con la que se rebelaron los Wichí en el corazon del Impenetrable.

Fueron acciones de hartazgo y bronca tras la desaparición de Salustiano Giménez, un joven wichí de 16 años, que se encuentra ausente desde el 12 de febrero pasado y sus padres, al igual que la comunidad wichí de Misión Nueva Pompeya, creen que fue asesinado. Su mamá Rosa Ángeles Campos, resignada, pedía que se le entregue el cuerpo para que la comunidad se tranquilizara, en un contexto de suma desconfianza en las instituciones del estado chaqueño para resolver casos como el de Salustiano.

Para que el gobierno provincial atendiera el drama de la comunidad se organizaron cortes piqueteros en los accesos. Luego del fracaso en la búsqueda que realizó la Policía del Chaco, se recibió asistencia de equipos federales que luego no continuó. Entonces la comunidad volvió a cortar los accesos.

Luego de 15 días de la desaparición y corriendo el mes de marzo, la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, y la secretaria de DDHH y Género Silvana Pérez, viajaron a la localidad con el objetivo de llegar a un acuerdo con la comunidad para que se levanten los cortes, ya que estos generaban desabastecimiento en el comercio local. Es así que se comprometieron a que se retome la búsqueda y se firmó un acuerdo con los dirigentes de la comunidad.

Nuevamente el día sábado 4 de marzo se frenó la búsqueda. Esto provocó la indignación wichí que se dirigió a la comisaría de Misión Nueva Pompeya para que acelere la investigación. Allí exigieron que interroguen a la persona detenida y sospechada de estar implicada en la desaparición de Salustiano ya que tendría información sobre su paradero, pero la policía en el acto lo trasladó a otra jurisdicción por orden del fiscal a cargo de la causa. Según Elizabet González, coordinadora de Pueblos Indígenas del Poder Judicial del Chaco, el implicado al que se detuvo no es indígena. Por eso la comunidad temía a que este fuera liberado.

El Poder Judicial ya había dejado impunes crímenes contra integrantes de la comunidad. El fiscal provincial Morales Bordón, además de ser responsable de la investigación por la desaparición de Salustiano, debía investigar la desaparición a fines de 2019 de joven Hernán

Andrada y los femicidios de Jorgelina Reinoso el año pasado y Dominga Arias en 2016. Ninguna de las causas tuvo avance en su resolución. El fiscal Morales Bordón, cuestionado por cajoñar y dejar de investigar crímenes anteriores, tenía que ser apartado, ya que así lo habían pedido los dirigentes de la comunidad como condición para firmar el acuerdo con el Ejecutivo provincial.

La bronca se manifestó en la ocupación de la Municipalidad, la quema del ingreso al Juzgado Multifueros y el intento de toma de la comisaría. Pero la violencia escaló cuando la policía detuvo a dos menores y luego al presidente de la Asociación Comunitaria Mario Ledesma. Es ahí cuando la comunidad recibió la amenaza de la policía de que "si no se dejan de joder, el presidente de la asociación va aparecer colgado"; por ello una abogada interpuso un habeas corpus. El día domingo se difundieron imágenes de agentes de la policía aparentemente desbordados y la invitación de ex policías y penitenciarios de la provincia a sumarse voluntariamente a la represión. El resultado de la represión fue la detención de 21 integrantes de la comunidad wichí y más de 40 heridos, entre ellos Gilberto Matorras herido en su muslo izquierdo por una bala de plomo. Se cree que provino del arma de algún criollo del lugar convocado por redes sociales a armarse. Posteriormente el ejecutivo provincial habilitó la intervención de la gendarmería, hecho que enardeció aún más a la comunidad.

Se quiso instalar que los wichí implantaban terror en Misión Nueva Pompeya y sin embargo sobre ellos y su cuero se pueden ver las marcas del terror, ese con las que actúan las fuerzas de seguridad. Entre las personas heridas, muchas fueron mujeres y entre los detenidos varios menores de la edad de Salustiano, que además fueron trasladados a la comisaría de Fuerte Esperanza, localidad alemana, para que se desconozca su paradero.

Con el correr de los días los detenidos fueron liberados y a la fecha Salustiano Giménez no aparece pese al fortalecimiento de equipos para su búsqueda.

La Guardia Comunitaria Whasek

La situación en el norte Wichí es de extrema pobreza. Las poblaciones sufren alarmantes condiciones de vida y es marcado el abandono por parte del Estado para garantizar necesidades básicas como la provisión de agua o suministro eléctrico, como así otros servicios. Los más bajos ingresos y simultáneamente los precios más caros para los consumos elementales de un hogar están en esta parte de la provincia y poco o nada ha cambiado en estos años de gobierno justicialista.

Sin embargo en detrimento de las precarias condiciones materiales de los habitantes del lugar se hacen importantes negocios agro-forestales que destruyen los bosques nativos. Esta realidad desigual y latente lleva a las comunidades indígenas a organizarse de diversas formas, definiendo distintas tácticas defensivas frente a situaciones incontenibles.

Precisamente entre los Wichí del Impenetrable nace la Guardia Whasek como herramienta de lucha para proteger el territorio arrasado por el desmonte y resguardar la integridad de la comunidad, expuesta al narcotráfico y la persecución policial. Es una experiencia interesante de participación, en las que emplean instancias democráticas para la definición de sus acciones como las asambleas y en sus filas sobresalen mujeres y un gran componente juvenil. La guardia comunitaria llegó a ser reconocida por resolución municipal en El Sauzalito e inclusive a sellar un acuerdo de articulación con el juez federal Miguel Aranda y el gobierno provincial por su eje ambiental. Pero la Guardia Whasek desde sus inicios ha sido demonizada por los mismos sectores que hacen negocios con El Impenetrable, ya sean legales e ilegales, y es apuntada por la Justicia Federal y sus fiscales.

Hoy, justamente en este contexto de conflicto, la Whasek es nuevamente perseguida. El fiscal federal Carlos Amad viene diciendo a la prensa que la guardia quebrantó el acuerdo de 2020. Hay que decir primero que la firma de tal convenio se dio bajo presión ya que la imputación que recaía sobre integrantes de la Whasek era por el delito de sedición y que el juez federal Aranda fue procesado en diciembre del año pasado por ser cómplice de un clan narco en la provincia, que principalmente la conformaban agentes de fuerzas de seguridad como la gendarmería y la policía del Chaco, las mismas fuerzas de seguridad que participaron de la represión al pueblo wichí. ¿Casualidad?

El fiscal Amad es reconocido por su labor en el esclarecimiento del caso Carbón Blanco, una red de tráfico de cocaína que salía al exterior y que parte del entramado estaba en el interior de esta provincia. Es así, también, que es parte del equipo de fiscales que investiga el clan Sosa del que es acusado el juez Aranda como cómplice. Habría que agregar que también se destaca por su labor en Juicios contra Crímenes de Lesa Humanidad. Ahora, sobre la Whasek, le dice a la prensa que es un grupo muy violento que no reconoce el imperio de la ley y las autoridades y no duda en acusarlos de terroristas. Lo del fiscal Amad va en línea con las manifestaciones xenófobas del ex vicegobernador Bacileff Ivanoff. El ex mandatario, que se fue del PJ para ser un halcón de la mano

dura, señala a la Whasek como una amenaza a la institucionalidad.

El Impenetrable, integrado por las localidades de Castelli, Miraflores, El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza entre otras, es una zona de disputa no solo por sus bienes naturales sino por sus características y ubicación estratégica. La Whasek viene dando cuenta de cómo la droga viene ganando en los pueblos originarios, denuncia que también hacía el abogado Rolando Núñez del Centro de Estudios Legales y Sociales Nelson Mandela en las publicaciones de sus últimos años. El Impenetrable es atravesado por el narco en su carácter de corredor a países y provincias limítrofes.

Al otro lado de los Wichí quiénes están

El gobernador Capitanich despliega un discurso garante de los derechos humanos, de ser un gobierno dialoguista y que trabaja para los sectores postergados. Sin embargo la prédica se choca con episodios como estos y una cosa es lo que pueden decir desde las usinas del poder y otra lo que termina pasando. Al otro lado de los pueblos originarios se para un estado y gobiernos de distintos niveles que nos lo ven como iguales. Ni la ministra de Seguridad y Justicia, la secretaria de DDHH, el Poder Judicial, la Intendencia, mucho menos la policía, impregnada de racismo que da impunidad al narco y que tortura; en ninguno encuentran aliados o semejantes. Más bien exclusión y criminalización materializada en políticas deshumanizantes, de maltrato y desprecio porque van a un hospital y no reciben atención, porque no pueden acceder a educación, trabajo o agua potable. Al otro lado de los pueblos originarios están todos ellos, sin grieta. También la UCR que en el pasado fue gobierno, que tras los hechos llamó a establecer el orden y la paz para beneficio de aquellos que sí ven como ciudadanos. La UCR lo piensa, el PJ en el gobierno lo ejecuta y acuerdan cuando las instituciones son cuestionadas. Estos sectores siguen construyendo viejas estigmatizaciones y prefieren pueblos originarios callados que no alcen la voz para exigir sus derechos elementales para cualquier ser humano, como aquellos que poseen sobre sus territorios.

Las comunidades originarias forman parte de ese pueblo que está oprimido por el dominio de los monopolios, y sus métodos de lucha son los propios de quienes están hartos de seguir viviendo en la miseria. Toda la solidaridad obrera y popular con los wichí. Viva la pueblada en el Impenetrable.

PRML – Regional Chaco

¿Hacia dónde tiene que ir el movimiento de mujeres?

Pasado el #8M y las distintas movilizaciones que recorrieron el país, una pregunta quedó en el aire: ¿hacia dónde tiene que ir el movimiento de mujeres hoy? La pregunta no es nueva dentro de un movimiento amplio y heterogéneo que tiene diversas derivas teóricas y políticas. Lo interesante es que volvió a resonar con fuerza como llamado de atención ante su pérdida de masividad, no sólo por parte de quienes venimos sosteniendo la calle contra su vaciamiento, sino también por parte de un sector del progresismo feminista que integra o apoya al FdT.

Sea una pose o una pregunta sincera, tomando nota que en la Ciudad de Buenos Aires se realizaron dos marchas, -una a Casa de Gobierno de la que fuimos parte y otra a Congreso convocada por organizaciones del FdT- y de que las movilizaciones perdieran fuerza luego de la conquista de la ILE, sectores afines al gobierno escribieron artículos preguntándose qué estaba pasando con este movimiento que parecía no tener techo. La excusa del desinfe estuvo puesta en la pandemia o en la reacción de la derecha, pero también hizo su aparición el problema de la institucionalización en la que cayeron muchas referentes. Y es que para decepción de muchas, el techo se lo puso el mismo gobierno que dijo venir a tirar abajo el patriarcado. Bajo este régimen político la estatización de la lucha está puesta al servicio de quitarle el potencial filo insurrecto al movimiento de mujeres. Los sectores dominantes tienen experiencia en esto: basta ver la década del '90 con intelectuales que se engolosinaron con la firma de tratados internacionales por nuestros derechos mientras avanzaba el neoliberalismo. A contracara nacía el movimiento piquetero con cientos de mujeres cortando rutas y poniendo la olla, transformando en lucha el mandato de alimentar a la

familia. Hoy el movimiento piquetero combativo es el que vuelve a poner en las calles la lucha contra el ataque a las condiciones de vida del pueblo. Fue el que llenó la Plaza de Mayo el #8M, salió contra el ajuste en distintas ciudades y el que enfrentó a la policía de Morales en Jujuy, alertando al feminismo progresista de que la salida no es congraciarse con lo posible dentro de un ministerio, sino profundizar la lucha callejera ante la crisis y sus nefastas consecuencias sobre nosotras. Y a su vez, que de esas consecuencias no se va a hacer cargo el frente de gobierno que convalidó la estafa con el Fondo, a fin de resguardar la timba financiera y los negociados de la gran burguesía, pasando por sobre la importancia de resolver las crecientes necesidades populares que dejó el macrismo. El tema es polemizar sobre esto con los sectores que ya plantean dudas y debates con el gobierno, pero que en medio de la decepción buscan mejoras apuntando a retocar un poco la justicia, o denuncian al FMI y que la deuda es con nosotras, augurando equilibrar la repartija dentro de un modelo y un

espacio político que ya da muestras de su fracaso. Esa no es la salida que necesita un pueblo cada vez más empobrecido y que tiene atadas sus condiciones de vida a la dependencia de la que viven multinacionales, monopolios y banqueros.

La tarea del pueblo trabajador hoy es sacarse de encima el lastre del FMI y como parte de ese pueblo le cabe la tarea al movimiento de mujeres y diversidades, que tiene que tomar en sus manos la lucha antiimperialista, no como una palabra más dentro de todos los anti con los que suele definirse el feminismo, sino como tarea principal en esta etapa. Porque con el imperialismo dirigiendo la economía no se resolverá la falta de presupuesto para salud, educación o para nuestras demandas, ni el problema del trabajo o de la miseria salarial y ni hablar de los problemas de fondo como la pobreza en la que somos mayoría.

Tenemos que salir a discutir dentro del movimiento la importancia de ir por un frente antiimperialista y antimonopólico, y los cuatro puntos, seguramente con sectores que no necesariamente

se encuentren con nosotras en el proyecto revolucionario y por el socialismo, pero que sí están avizorando que la situación empeora y que con el FdT hay FMI para rato, atentas también a enfrentar a JxC y los más rancio de la derecha. Es importante reforzar este punto de vista entre las trabajadoras ocupadas buscando la unidad con el movimiento piquetero combativo para darle fuerza.

Si la pregunta es para dónde tiene que ir hoy el movimiento de mujeres, sostener la lucha callejera y aportar con sus reivindicaciones a construir ese frente y con la más amplia unidad, es parte de la respuesta.

Julia Quinteros

Te invitamos a leer las notas publicadas el #8M y por qué salimos a las calles en el FB: Mujer y Rebelión

Sobreseimiento para Cecilia Corregidor

A un año de la detención de nuestra compañera Cecilia Corregidor, dirigente de la CUBa MTR de Jujuy, la fiscalía pidió el sobreseimiento en la causa. Recordemos que Cecilia fue privada de su libertad en la localidad de San Pedro y estuvo una semana presa en un establecimiento penal. Después de una feroz represión por parte de la policía del gobernador Gerardo Morales contra organizaciones que se encontraban luchando por asistencia a merenderos y comedores, mientras se dirigía a la comisaría a reclamar por los detenidos, efectivos policiales la bajaron de su vehículo y se la llevaron sin informar a nadie su paradero.

Los delitos que se le atribuyeron fueron entorpecimiento a la circulación, amenazas y lesiones al personal policial. La autoría de los mismos nunca fue probada y finalmente el fiscal pidió al juez su sobreseimiento. Todas las manifestaciones de solidaridad con la compañera dieron su resultado y reforzaron la convicción de que en unidad y en las calles es posible derrotar el ajuste y la represión de Morales.

Corresponsal

Teatro Abierto: el movimiento cultural que resistió a la dictadura

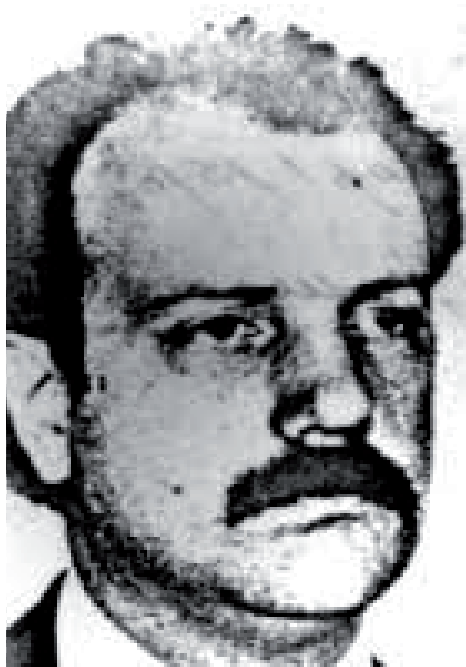
El Teatro Abierto fue el movimiento que se plantó como resistencia cultural a la última dictadura cívico-militar. En ese contexto en que empezaron las persecuciones, se prohibió la actividad política, se dieron de baja a los sindicatos, la censura imperaba en el cine, la TV y la prensa, el sector teatro independiente se veía afectado en menor medida ya que los integrantes de la cúpula lo catalogaban como una actividad de baja importancia.

Pero hubo un disparador que hizo que el teatro buscara la manera de resistir y sentar un precedente: este fue la resolución que borraba al teatro argentino de la materia de Literatura argentina en los lugares donde esta se dictaba. Tras una serie de reuniones que se llevaron a cabo en el segundo piso de Argentores, en 1981 Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Carlos Somigliana, Carlos Gorostizay Ricardo Halac dieron inicio en el teatro El Picadero a Teatro Abierto. Luego se sumarían Gonzalo Núñez, Jorge Rivera López, Luis Brandoni, Oscar Viale, Pepe Soriano, Griselda Gambaro y muchísimos actores y actrices, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel -recién elegido Premio Nobel de la Paz-, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. En ese momento eran contados los movimientos públicos organizados enfrentado a los militares, como las Madres de Plaza de Mayo.

Teatro Abierto ofrecía tres obras cortas por día los siete días de la semana a pre-

cios populares, la mitad de lo que costaba la entrada del cine. Todo lo recaudado era puesto a disposición de los gastos e imprevistos que ocasionara el teatro, pero el acuerdo era que ninguno de los integrantes cobrara un peso. Había un público politizado que precisaba un lugar donde juntarse y esa necesidad se la estaba colmando el teatro. Entre las obras de aquellos ciclos pueden mencionarse "Lejana tierra prometida" de Ricardo Halac, "Decir sí" de Griselda Gambaro, "Gris de Ausencia" de Roberto Cossa, "Tercero Incluido" de Eduardo Pavlovsky, "Oficial Primero" de Carlos Somigliana. "Príncipe Azul" y "Criatura" de Eugenio Griffiero, y muchas obras que se convirtieron en clásicos del teatro independiente. El 6 de agosto de 1981 El Picadero fue incendiado y ante la desazón y la injusticia nadie intentó dar un paso atrás. Más allá del miedo y las persecuciones 17 salas ofrecieron dar continuidad al ciclo. Finalmente se decidió por el teatro Tabarís que tenía el doble de capacidad. Al cerrar el ciclo de ese año habían pasado por ahí cerca de 25.000 espectadores. El ciclo se repitió en 1982, en 1983 (con el lema de "ganar la calle") y en 1985 (el "teatrero", con el lema "En defensa de la Democracia, por la liberación Nacional y la Unidad latinoamericana"), ya bajo el gobierno constitucional.

Carlos Ruiz



Tres pilares, un estilo y un método

Presentamos esta nota que se publicó originalmente en el *no transar* n°166 de mayo de 1977, en plena dictadura cívico-militar. En ella, nuestro entonces secretario general Roberto Cristina -firmando bajo el seudónimo de Guillermo Juárez- daba cuenta de las tareas partidarias en el marco de una táctica defensiva, propia de la correlación de fuerzas imperante en aquellos años.

Pero más allá de las consideraciones de coyuntura, este documento guarda un alto valor estratégico. Primero, por estar formulado en función de poner el centro de la lucha en **la reorganización del movimiento de masas, en especial de la clase trabajadora**. Y en función de ello, por jerarquizar el rol dirigente del partido revolucionario y la necesidad de su consolidación, lo cual incluye hacerle frente a las adversidades de la lucha de clases para que el proyecto se sostenga de pie y luchando. El camarada Cristina tenía plena conciencia de lo que estaba escribiendo: algo más de un año después de esta nota, era secuestrado junto a gran parte de la dirección nacional en El Vesubio, tras lo cual continúa desaparecido.

En un nuevo aniversario del 24 de Marzo, volvemos sobre este escrito a manera de homenaje para con Roberto Cristina y esa camada de militantes revolucionarios; pero sobre todo como insumo para seguir encarando la tarea de construir el partido revolucionario, la organización de combate que necesita la clase trabajadora para encabezar al conjunto del pueblo oprimido en la lucha por conquistar el poder y avanzar en las tareas de liberación nacional rumbo al socialismo.

El primer pilar

La sólida unidad del partido alrededor de su política, su táctica, su estrategia, su programa, sus principios, es la base fundamental de toda su consolidación. Preservar, fortalecer, elevar esa unidad es la única clave que nos puede permitir resolver acertadamente los problemas planteados por el resto de las tareas de consolidación. Ni en sueños se puede imaginar que un partido desunido políticamente, o unido solo alrededor de interpretaciones del momento y tareas inmediatas, pueda frustrar la campaña de aniquilamiento que la dictadura ha desatado contra nosotros y dirigir a las masas desde sus posiciones actuales hasta la victoria sobre esa misma dictadura.

La política, la táctica, la estrategia y los principios del partido son correctos. Son las armas fundamentales con las que cuenta el partido para enfrentar y batir a sus enemigos. Ninguna otra arma es más poderosa que estas. Es tarea de todo el partido pertrecharse de ellas, conocerlas, aprender a manejarlas y usarlas.

Solo el fortalecimiento de nuestra unidad política y de principios, solo un consciente y duro esfuerzo de aplicación unificada nos permitirá emprender con éxito seguro no solo el resto de las tareas de consolidación, sino también formar una amplia legión de continuadores que puedan cubrir con rapidez y eficacia los claros que la represión produce e inevitablemente seguirá produciendo en nuestras filas. Y esta es la garantía de que aunque deba pasar de manos la bandera del partido seguirá siempre izada y altiva hasta la victoria.

El segundo pilar

No basta que todas nuestras brújulas apunten a un mismo norte; es necesario que nuestras filas estén animadas de la voluntad férrea, de la audacia y del espíritu solidario que se necesitan para superar todas las dificultades y sacrificios que nos separan de él. Si el primer pilar de un partido consolidado es la sólida unidad política y teórica, el segundo pilar es su fuerte movilización ideológica al servicio del proletariado y el pueblo.

Épocas como estas en que la revolución da pasos atrás, son épocas en que nuestra revolucionarización ideológica debe dar pasos adelante.

Aprendiendo de nuestros camaradas ejemplares, de Emilio Jáuregui y Raúl Kossoy, del Chino Moríña y el Barbijo Pacciaroni, de Jorge Weisz y Ana María Estevao; tomando el ejemplo del puñado de camaradas reorganizadores del partido, debemos emular conscientemente sus virtudes, romper con toda situación material que dificulte el cumplimiento de las tareas revolucionarias para las que el partido nos reclama, combatir las manifestaciones mezquinas de espíritu de supervivencia personal, de comodidad, de egoísmo.

Todos los militantes del partido, dirigentes y bases, jóvenes y viejos, de origen proletario o no, deben intervenir en esta campaña por hacer más rojo al partido. El ejemplo debe ser dado por los dirigentes, por los viejos camaradas, por los obreros. Su reflejo más alto será que crezcan las postulaciones para emprender las tareas más pesadas que el partido tiene por delante, pero no su único reflejo. Toda la actividad cotidiana, y a veces gris del partido deberá ser campo de manifestación de que aumenta nuestra movilización ideológica, nuestra determinación revolucionaria.

El tercer pilar

La unidad y la combatividad del partido, con ser mucho, no son pilares suficientes para mantener un partido consolidado. Se necesita un tercer pilar y ese no es otro que el estrechamiento de sus vínculos con las masas. Solo a través de esos vínculos podemos nutrirnos, crecer, sacar las fuerzas que nos permitan recuperarnos de los golpes que el enemigo nos propina, y devolver esos golpes de acuerdo a las condiciones.

Esta época en que el enemigo quiere separarnos de las masas para aniquilarnos con mayor facilidad debe ser la época en que respondamos a esa maniobra estableciendo los vínculos más amplios y diversos con las masas allí donde ellas se encuentren.

En particular debemos trabajar en las organizaciones sindicales que permiten un vínculo más amplio con las masas

obreras. A través de un trabajo paciente en estas organizaciones de trabajadores, debemos unirlos, organizarlos, elevar su conciencia, dirigirlos en sus luchas concretas. Debemos ganarnos así su respeto y aprecio. Sobre esta base hacer crecer al partido y construir agrupaciones combativas que defiendan clara y consecuentemente los intereses de los trabajadores, que se opongan a las medidas concretas de la dictadura y las patronales que los perjudican, que no siembren ilusiones sobre la dictadura, sobre las FFAA asesinas u otras fracciones reaccionarias, que recojan la bandera de la independencia de clase y la democracia sindical y que hagan de la lucha de masas su método principal para el logro de conquistas.

El estilo

En esta época el estilo de trabajo que debe impregnar todas las tareas partidarias es el de trabajar en profundidad y a largo plazo, trabajar con independencia y autonomía bajo las orientaciones del Comité Central.

La base de un trabajo en profundidad es el establecimiento de vínculos amplios con las masas. A partir de allí es necesario desarrollar un trabajo multifacético que vaya más allá de los problemas y las reivindicaciones de momento. Que sirva al estrechamiento de la unidad y la solidaridad de clase y que eleve paulatinamente su nivel de organización por todos los caminos posibles.

Trabajar a largo plazo es trabajar tenazmente con la orientación de construir una organización sólida, duradera del partido, sean muchas o pocas las luchas, frecuentes o espaciadas. Trabajar a largo plazo es juzgar todo trabajo, el nuestro en primer lugar, a partir de lo que acumulamos y no del alboroto que armamos. Es desechar totalmente el punto de vista reaccionario de que nada puede hacerse en momentos de pasividad y afirmar el punto de vista revolucionario de que en momentos de pasividad se preparan las condiciones que permiten las grandes victorias, cuando se abren las condiciones favorables y las masas se ponen en movimiento.

Trabajar con independencia es aplicar a las condiciones concretas de cada área de trabajo las orientaciones gene-

rales del partido. No son estas épocas para que todos los organismos del partido marchen a la par, sino épocas en que marchando todos en la misma dirección, cada uno lo haga al ritmo y por los senderos que impongan la situación del sector del movimiento de masas en que se trabaja.

Trabajar con autonomía es dar base material a la independencia de aplicación. Es convertir en norma que preside toda decisión y todo trabajo el principio de apoyarse en las propias fuerzas. Trabajar con autonomía es crear y contar con las condiciones para que todos los organismos del partido puedan resolver solos y bien los aspectos prácticos de su trabajo. No prestar atención a la autonomía es no prepararse para actuar en condiciones más duras que la presente, en condiciones de aislamiento transitorio del resto de la organización, en condiciones en que es más preciso que nunca mantener alta la bandera del partido y su actividad.

El método

Debemos construir el partido sobre estos pilares y con ese estilo, y debemos hacerlo metódicamente. Siguiendo el método conspirativo de trabajo. El método de mantener estrictamente aislados unos organismos de otros en el mismo nivel y reduciendo al mínimo posible los contactos de cada uno de ellos con los niveles superiores y siempre por iniciativa de ellos. El método de reducir a lo estrictamente indispensable la información que se maneja en cada uno de los organismos y por cada militante. El método de construir todo evitando que un golpe en un punto arrastre a otros.

La aplicación de este método debe basarse en la aceptación consciente de la prevalencia del centralismo sobre la democracia en las actuales condiciones, en la práctica consciente de la disciplina más férrea. A partir de estas bases y del cultivo continuo de la determinación de todos nosotros de no suministrar ninguna información a los enemigos de clase, sean cuales fueren los sacrificios que esto implique, será posible aplicar sistemáticamente este método.

¿Una señal del principio del fin?

Existen empresas que al momento de su conformación carecen de capital suficiente como para sostener el pago a proveedores, insumos, salarios, etc., e incluso que durante un tiempo no serán capaces de generar utilidades y, sin embargo, logran desarrollarse a partir de alguna tecnología. Se trata de empresas emergentes, incipientes o, simplemente, startups. Funcionan al fiado, con plata prestada por algún banco cuya parte en el negocio es reunir el dinero necesario en un fondo de inversión de riesgo (conformado por apostadores dispuestos precisamente a arriesgarse) para luego llevarse la parte del león de las futuras ganancias, una vez que la empresa escale.

¿Quién invertiría en una compañía de taxis sin vehículos, ni choferes, ni seguros de accidentes, ni garajes, y que sólo dispusiese de una app para conquistar el mercado del transporte urbano a nivel global? Sin embargo, Uber Technologies Inc, nacida en San Francisco, California (la cuna de este tipo de empresas), opera en más de 900 ciudades a nivel mundial facturando comisiones por el acarreo de personas, y también por la entrega de alimentos, paquetes, mensajes e incluso por el alquiler de bicicletas, motocicletas, trasbordadores, etc.

Lo que ha entrado en zona de borrascas son muchas de estas empresas

tecnológicas ya escaladas, es decir de la categoría "peso pesado", y con ellas los bancos encargados del financiamiento tras el repentino retiro de inversores a negocios más seguros.

La alarma se encendió en 2022, tras la pandemia, cuando se registraron más de 160.000 despidos en alrededor de 1.000 empresas y siguió en 2023 con Google anunciando el recorte de 12.000 puestos de trabajo (6% de su plantilla global), ZOOM 1.300 puestos laborales (15%), Dell que sacó a 6.600 trabajadores (5%), PayPal que hizo lo propio con otros 2.000 trabajadores (7%), Amazon con 18.000 empleos (1%), Salesforce, empresa de software y aplicaciones de gestión, 8.000 empleos (10%), Coinbase, plataforma de administración de criptomonedas, 1.000 empleados (20%), Spotify 600 puestos de trabajo (6%), Netflix 300 empleados a nivel mundial (3%), Disney+ 7.000 trabajadores (3%) y la más reciente, Meta Platforms, la firma matriz propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, que acaba de anunciar el despido de cerca de 10.000 trabajadores como parte del recorte que comenzó en noviembre de 2022, cuando desvinculó a otros 11.000 trabajadores. Todas por elevación de costos y caídas de sus mercados.

Fue precisamente el financista libertario Peter Thiel, cercano a Donald

Trump, hasta ahora encargado de proveer financiamiento para estos proyectos, quien recomendó a sus clientes bajarse de los bancos para refugiarse en los bonos del tesoro, el oro u otro activo más seguro, circunstancia que permitió a Trump anunciar el comienzo de una depresión peor que la de 1929. Lejos en el tiempo de aquella Gran Depresión, asistimos a la caída de las piezas del dominó bancario que arrancó con el Silicon Valley Bank, socio de las empresas tecnológicas de California, que invirtió parte de su excedente financiero en bonos del tesoro y no tuvo capacidad de devolución cuando comenzó el retiro de los depósitos. Poco después debió ser intervenido el Signature Bank de Nueva York, asociado también al mismo tipo de riesgo, y luego el Credit Suisse que podría arrastrar al UBS, entre los principales bancos suizos y de Europa. En este contexto el lunes 13 de marzo se suspendió la rueda de cotizaciones de 14 bancos en los Estados Unidos al tiempo que caía el precio de las acciones de los cuatro bancos más importantes de ese país y del mundo capitalista: Wells Fargo, Bank of America, City Bank y J.P. Morgan.

La razón de fondo de esta corrida de los depósitos bancarios a los bonos del tesoro está en el incremento de la tasa de interés decretada por la Reserva Federal en un intento por frenar la inflación. La razón de fondo de la inflación

está en la duplicación de la base monetaria en los Estados Unidos provocada por la elevada emisión de dólares en el contexto de la pandemia, momento en el cual, además, se retrajo el comercio mundial, cuando Estados Unidos declaraba la guerra comercial a China, cerrando así el comercio multilateral y sepultando la globalización. Precisamente, el fin de la globalización trajo aparejadas tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos, Europa y China y hoy asistimos al resultado de la pelea: mientras las empresas tecnológicas estadounidenses, en su mayoría vinculadas al comercio y la producción de servicios, ven caer sus ganancias arrastrando a los principales bancos estadounidenses y europeos, las empresas tecnológicas chinas, reguladas por el Estado, acrecientan su desempeño en áreas como la inteligencia artificial, la robótica, la balística hipersónica y la computación cuántica. Seguramente Trump esté en lo cierto al afirmar la gravedad de la situación estadounidense; sin embargo, es probable que sumado a esto estemos a las puertas del principio del fin de la hegemonía industrial, comercial, militar y financiera norteamericana.

Jorge Díaz

La Constitución de 1949

El 16 de marzo de 1949, durante el primer gobierno de Perón, se sancionó la reforma de la Constitución nacional argentina.

El texto principal de nuestra Constitución data de 1853, y es el que en sus aspectos centrales sigue vigente, más allá de distintas reformas. En ella se declaran los derechos civiles y políticos. Es una constitución liberal, que sostiene que es la acción privada y la defensa de la propiedad privada lo que promueve el desarrollo justo. La concepción central gravita en torno al individuo y sus derechos.

La reforma de 1949 planteó un giro en el enfoque. Esta deviene de la doctrina social de la iglesia, la cual condena las desigualdades sociales, y de un movimiento jurídico internacional que se conoce con el nombre de constitucionalismo social. Si la de 1853 asentó los derechos civiles y políticos, la Constitución de 1949 introdujo los derechos sociales. Si antes era la acción privada y la defensa de la propiedad el principio ordenador, en el '49 la centralidad la ocupan los derechos sociales y la intervención del Estado.

Sostiene en su prólogo "la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia."

La Reforma del 49 otorgó rango jurídico constitucional a las medidas económicas que el gobierno de Perón venía impulsando. En su primer mandato impulsó el IAPI. Con él, se produjo el monopolio del Estado en el comercio exterior, que compraba a los productores locales las cosechas y las vendía en el mercado mundial. Los ingresos obtenidos de las ventas fueron destinados a promover el desarrollo industrial por medio de créditos estatales con tasa de interés menor que la inflación. Los depósitos bancarios, los ahorros pueblo, habían sido nacionalizados algunos años atrás. El control de la banca y el monopolio del comercio exterior, permitieron impulsar políticas de soberanía económica basada en el desarrollo industrial. En este periodo se dio impulso la flota mercante nacional y se crearon las empresas estatales SOMISA, Agua y Energía Eléctrica, Ferrocarriles Argentinos, ENTel y Aerolíneas Argentinas.

La nueva carta planteó los "Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, y de la educación y la cultura". A la vez declaró "la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica": el capital debe estar al servicio de la economía nacional, que debe tener como principal objetivo el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto y la justicia social. También se estableció jurídicamente el monopolio del estado en la economía: "El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad...". Los recursos estratégicos y los servicios fueron declarados de propiedad nacional: "Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación", y la propiedad estatal de los servicios públicos, que "bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación."

Así, la Constitución del '49 fue el programa de un proyecto nacional burgués en el poder, derrotado tras el golpe gorila de 1955, que anuló dicha Constitución.

Un año después, la convención constituyente agregaría el artículo 14 bis.

La Constitución del '49 tuvo varios puntos progresivos. Su reivindicación de los derechos sociales cobra relevancia en este período en que los mismos son alevosamente incumplidos. El control nacional de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, así como la potestad del Estado de intervenir en áreas clave de la economía nacional, son puntos centrales de un programa antimonopólico y antiimperialista.

En cuanto a la función social de la propiedad privada, se trata de una fórmula que expresa la ilusión de una existencia armónica entre las clases, propia de un proyecto burgués nacional. La superación de esas inconsistencias pasa por la política firma de unidad y lucha que debe librar la clase trabajadora dentro del frente de liberación nacional y social, para que las tareas antimonopólicas y antiimperialistas sean la antesala de las tareas que avancen hacia la construcción del socialismo.

Sabrina Fara

El Salvador

El detrás de cámara del gobierno de Bukele

La profusa difusión que han tenido en las últimas semanas algunos videos sobre el encarcelamiento de las maras en El Salvador, ha despertado entre la dirigencia política y los principales medios de comunicación una exaltación reaccionaria al estilo "cárcel o bala" de un lado y la hipocresía progresista del otro. Ambas posturas coinciden en estar completamente alejadas de la solución al surgimiento y arraigo de las organizaciones criminales de cualquier tipo.

En El Salvador las maras comenzaron a operar en la década de los '90, luego de haber sido deportados del oeste de los Estados Unidos, donde habían empezado a funcionar entre migrantes centroamericanos. Estos grupos, dedicados a actividades como secuestros extorsivos, asesinatos por encargo, narcotráfico, extorsión, llegaron a tener en este siglo un desarrollo y control territorial que llevó a El Salvador a ubicarse en los primeros puestos mundiales de criminalidad. Los gobiernos del FMLN y de ARENA (los dos partidos que se turnaron en el poder en los últimos treinta años), lejos de resolver el problema, han visto crecer el fenómeno bajo su sombra.

El desprestigio acumulado de ambas coaliciones dejó liberado el camino para que un empresario, "outsider" de la política y autopercebido "anticasta" como Nayib Bukele, aprovechara la oportunidad. Apoyado en la personería electoral de un viejo partido de la derecha salvadoreña -la Gran Alianza Nacional- llegó a la presidencia en 2019.

Si bien en los últimos tiempos su figura ha tenido repercusión mundial por la imagen que su propio gobierno difunde, de inflexible e impiadoso con los delincuentes organizados en las maras, el recorrido de su gestión ha sido por lo menos sinuoso en este terreno. Al poco tiempo de asumir la presidencia su política hacia estos grupos consistió en un acuerdo con sus líderes, mediante el cual éstos se comprometían a reducir el nivel de violencia, especialmente los asesinatos, y a colaborar en la campaña electoral de las elecciones legislativas de 2021. A su vez desde el gobierno se garantizaba frenar los pedidos de extradición que hacía la justicia estadounidense para los principales cabecillas, reducción de penas y beneficios varios en el régimen carcelario. Este pacto mantuvo su vigencia durante casi los primeros tres años del gobierno de Bukele.

El acuerdo fue beneficioso para ambas partes. Las pandillas vieron garantizada la no extradición de sus líderes, vieron reducidas sus condenas, y pudieron mantenerse activas en todo el territorio nacional, esto es, recaudando los frutos de sus extorsiones al pueblo y manejando el narcotráfico como de costumbre, solo que evitando las masacres que habían hecho famoso a su país.

El gobierno pudo mostrar estadísticas sorprendentes: la tasa de homicidios, que en 2015 superaba los 100 cada 100.000 habitantes, se redujo en 2021 a 20 cada 100.000. Y, lo más importante, Bukele logró un triunfo en las elecciones que le permitió tener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

Apenas logrado el control del parlamento, el gobierno destituyó a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los sustituyó por jueces afines, quienes devolvieron el favor inmediatamente habilitando la posibilidad, prohibida en la Constitución, de la reelección presidencial.

El pacto con las maras resistió al menos tres masacres. La última, que terminó rompiendo definitivamente el acuerdo, sucedió en marzo de 2022 y se cobró la vida de 87 salvadoreños. Pero hubo dos anteriores. Una a finales de abril de 2020, en plena cuarentena, donde las maras asesinaron a 76 personas y otra en noviembre de 2021, cuando las pandillas asesinaron a 45 personas. Después de las dos primeras masacres los funcionarios del gobierno tuvieron reuniones con los capos criminales en las cárceles y prorrogaron el pacto. La tercera habilitó un giro en la táctica hacia las bandas. Después de más de 200 muertes, el gobierno consideró que el acuerdo estaba agotado. A partir de este momento se dictó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional (un equivalente a nuestro Estado de Sitio) y se facultó al ejército para usar la fuerza letal en las calles. Simultáneamente se puso en marcha un show propagandístico con miles de hombres con las cabezas rapadas, esposados en el patio de una cárcel y custodiados por uniformados encapuchados y con armas largas. Luego vino la construcción en tiempo récord de una mega cárcel (la más grande de América en el país más pequeño del continente), y la difusión internacional y repetitiva de diversos videos donde los funcionarios penitenciarios y el propio Bukele se vanaglorian de su "lucha contra el crimen organizado", resaltando detalles como que el Estado no les garantiza colchones ni comida a los reos. Siempre las sobreactuaciones buscan ocultar la realidad. Los presos hasta ayer eran sus socios y protegidos.

Lo cierto es que el estado de excepción que se dictaminó por un mes fue prorrogado doce veces y este 27 de marzo El Salvador cumple un año con sus libertades democráticas suspendidas. Desde entonces están habilitadas las detenciones arbitrarias, las prisiones preventivas se extienden hasta los dos años y en algunos casos hasta los cuatro, la edad de imputabilidad bajó a los doce años, y todo queda en manos de la policía y el ejército sin intervención de un juez ni derecho a la defensa. A partir de ahí nadie puede asegurar cuántos de los 60.000 nuevos detenidos (en un



país de 6 millones de habitantes) son integrantes de las maras y cuántos no. Desde hace un año se acumulan denuncias por detenciones de dirigentes sindicales, ambientales, activistas políticos y jóvenes de los barrios más humildes de las principales ciudades.

Como es esperable, el giro en la táctica hacia estas organizaciones ha implicado un respaldo ampliamente mayoritario al gobierno. Desactivar a las bandas criminales que durante más de veinte años vivieron de la extorsión y el terror al pueblo era la demanda número uno de la población. Sin embargo quedan algunos interrogantes.

Primero hay que destacar que, contradiciendo lo que intenta transmitir la propaganda de Bukele y que la reacción continental repite, los números indican que el principal derrumbe de la tasa de homicidios en el país se dio durante el tiempo en que regía la "tregua" con las maras, y no a partir del régimen de excepción. Es decir, el éxito se dio en plena "luna de miel" entre maras y gobierno, justo lo contrario de lo que plantea la propaganda oficial. Por lo demás, comparar esos números con los que se puedan obtener en pleno estado de sitio carece de todo rigor científico.

En segundo lugar, desde hace un año el control de las calles en el país está en manos de las fuerzas de seguridad (policía y ejército). Es el mismo ejército que, con instrucción y adiestramiento directo del ejército de los Estados Unidos, se encargó de la guerra contrainsurgente que se extendió en El Salvador hasta entrados los años 90. Son los mismos uniformados que masacraron al pueblo salvadoreño y a sus organizaciones revolucionarias, y que nunca fueron sometidos a juicio ni castigo alguno. El control territorial que tenían las

maras, ahora empieza a tomar forma bajo la bota militar.

En un país donde poco más de un centenar de millonarios es propietario del 85% de lo producido por todos los salvadoreños, donde un cuarto del PBI proviene de las remesas de los migrantes en EEUU, donde el endeudamiento supera el 90% del PBI, garantizar la seguridad y el bienestar de la población no es algo que se resuelva entrando al Guinness del punitivismo, como muchos quieren ver. Tampoco repitiendo el mantra hueco del progresismo acerca de las oportunidades y el garantismo ingenuo. A estas bandas se las combate principalmente dando vuelta las condiciones sociales que permiten que éstas arraiguen, es decir atacando de frente la dependencia del imperialismo y los monopolios que parasitan a nuestras naciones y pueblos en América Latina, y promueven la descomposición social sobre la cual se montan estas lacras.

Un gobierno verdaderamente popular, o sea revolucionario, deberá tener mano de hierro con organizaciones criminales por el estilo. Y mano de hierro no significa vejaciones, torturas ni revanchismo de ningún tipo, sino cortar de raíz el problema. Eliminar las condiciones que permiten la aparición y el desarrollo de estos parásitos sociales. Esto es posible sobre la base de la suspensión de la sangría que es la deuda externa y la recuperación de los recursos estratégicos, para poner todo al servicio del desarrollo y el bienestar del pueblo.

Leo Funes